

30238

ASISTENCIA EN MATERIA DE LEGISLACION SOBRE  
COLONIZACION Y AGUAS SUPERFICIALES para la  
PROVINCIA DE LA PAMPA

(Primer Informe Parcial )

Dr. ALBERTO GONZALEZ ARZAC

0

H. 114

626

7

Setiembre 1984

REVISION DE LA LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA DE COLONIZACION  
DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

NORMAS DE LA CONSTITUCION NACIONAL.

Los artículos 67 inciso 16 y 107 de la Constitución Nacional de 1853-60 colocan el tema de la colonización en el Derecho Constitucional argentino, al atribuir al Congreso de la Nación la facultad de promover la colonización de tierras de propiedad de la Nación o de las provincias, respectivamente.

Alberdi en sus "Bases" y en el "Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina" acordó esa dignidad constitucional al tema de la colonización en el campo doctrinario.

En otro trabajo realizado para el Consejo Federal de Inversiones<sup>(1)</sup> he señalado que es evidente que en el derecho argentino la acción de colonizar está perfectamente diferenciada de la venta de tierras fiscales. "Aquella actividad es promovida por el Estado Nacional y las provincias conforme a claras normas constitucionales, procurando la formación y desarrollo de colonias con el objeto de fijar pobladores y cultivar tierras. En cambio la venta de tierras fiscales es un recurso patrimonial del Estado, que puede coincidir o no con la acción de colonizar, pero conceptualmente debe estar diferenciada".

El mismo Alberdi concibió dos maneras diferentes de poblar nuestro territorio: "el de la población artificial y el de la población espontánea". Para la población artificial reservó la cláusula constitucional referida a la "inmigración y la colonización de tierras"<sup>(2)</sup>.

La Constitución Nacional de 1949 había agregado a la atribución del Congreso relativa a "la colonización de tierras de propiedad nacional" (art.67 inc.16) la necesidad de "la extinción de latifundios, procurando el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación". Y el artículo 38 establecía: "Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurando a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva"; a tal fin incorporó el concepto de "unidad económica familiar" entre los derechos especiales de la Familia.

## NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

El artículo 107 de la Constitución Nacional ubicó la materia en consideración dentro de nuestro Derecho Público Provincial<sup>(3)</sup>. Numerosas constituciones provinciales contienen normas sobre colonización: Catamarca (art.51), Chaco (38-9,46), Chubut (69-70), Entre Ríos ( 8,45/6), Formosa ( 7), Misiones (5//4), Neuquén (241), Río Negro (42), Santa Cruz (7 ), Santa Fe (28), Santiago del Estero (29), y La Pampa, según se verá a continuación.<sup>(4)</sup>

Debe puntualizarse que ha sido pionera en ese sentido la Constitución entrerriana de 1933, orientada definitivamente hacia el campo social en todo cuanto le fué permitido dentro de la órbita de su autonomía<sup>(5)</sup>. Y cuando el país se encontraba ya enrolado en la tendencia del constitucionalismo social como consecuencia de la sanción de la Constitución Nacional de 1949, la Constitución pampeana de 1952 en su artículo 23 atribuyó similares objetivos al Estado provincial que los fijados por aquella para el Estado nacional respecto del "destino, la distribución y el manejo de la tierra rural y de los bosques de su propiedad"; por ello es que dentro de las facultades de la Legislatura provincial (art.50) estaba previsto "legislar sobre uso y enajenación de las tierras de propiedad provincial y sobre la enajenación de bienes inmuebles" (inc.6) y proveer lo conducente "al desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación", promover la "colonización de las tierras fiscales y de las provenientes de la extinción de latifundios" (inc.15).

La Constitución de la Provincia de La Pampa sancionada en 1960 es minuciosa y reglamentarista en materia de colo-

nización, como surge del enunciado de los siguientes artículos:

"Art.30: Las tierras fiscales destinadas a la explotación agropecuaria deberán ser colonizadas mediante la entrega en propiedad con pago a largo plazo, o en concesiones vitalicias hereditarias, a trabajadores rurales que no sean propietarios de una unidad económica".

"La provincia promoverá la colonización, división y adjudicación de las tierras fiscales, con fines de fomento, ajustándose a las siguientes bases:

- a) Distribución por unidades económicas;
- b) Explotación directa y racional por el adjudicatario;
- c) Adjudicación preferencial a organizaciones cooperativas, las que se excluyen de la prohibición del inciso g);
- d) Suficiencia y seguridad del crédito oficial con destino al bienestar y la producción;
- e) Trámite sumario para el otorgamiento de los títulos una vez cumplidas las exigencias legales por parte de los adjudicatarios;
- f) Reversión por vía de expropiación a favor de la provincia en caso de incumplimiento de los fines de la colonización, a cuyo efecto la ley declarará de interés social la tierra que se adjudique, a la resolución del contrato en su caso;
- g) La prohibición de adjudicar lotes a sociedades mercantiles cualquiera sea su forma, salvo cuando el destino de la tierra en pequeñas parcelas sea para la radicación de industrias".

"Art.31 : En caso de insuficiencia de tierras fiscales aptas pa-

ra colonizar, la provincia expropiará las que se encuentren en poder de sociedades monopolistas, los latifundios, los minifundios y los predios destinados a obtener renta mediante la explotación de terceros, respetando el derecho del propietario a la unidad económica y al bien de familia".

"Art.39:El uso del crédito en las formas establecidas podrá autorizarse unicamente cuando su producido sea destinado a la ejecución de obras públicas, para hacer efectivos planes de colonización agraria o para atender gastos originados en catástrofes, calamidades públicas u otras necesidades excepcionales o impostergables del Estado, calificadas por ley, sin poder aplicarse en ningún caso o enjugar déficit de administración".

Sin perjuicio del posterior comentario de las mencionadas cláusulas, la inclusión del vocablo "deberán" en el apartado inicial del artículo 30 obliga a un comentario inicial.

La utilización del verbo "deber" puede parecer a simple vista una obligación inexcusable de los poderes del Estado a que "las tierras públicas destinadas a la explotación agropecuaria" sean "colonizadas". Pero a poco que se examine la redacción del texto constitucional podrá observarse que no es así, puesto que la frase no tiene una construcción perfecta. En efecto, un criterio literal llegaría al absurdo de colocar el "deber" de colonizar en las mismísimas "tierras fiscales" (como sujeto de tal deber).

Es así como debe desecharse la interpretación literal, para procurar establecer el espíritu de la norma. Y a tal efecto, el siguiente apartado arroja luz sobre las obligaciones

a cargo de los poderes públicos, al utilizar el vocablo "promoverá" (del latín, *promovère*), que da la idea de procurar el logro de algo, pero sin la nota de obligatoriedad que pareciera inferirse del apartado anterior. De esa manera la inteligencia de la norma vuelve a su quicio.

Una interpretación prudente del artículo 30 permite establecer que no todas las tierras fiscales deben ser colonizadas, sino aquellas en las que sea posible o conveniente establecer colonias. De lo contrario, los poderes públicos estarían obligados a una tarea colonizadora que estaría más allá de sus posibilidades y que podría tornarse ruinosa para la Provincia e incluso para los propios adjudicatarios, cuando la naturaleza de las tierras no aconsejara su colonización.

No viene al caso enumerar las permanentes objeciones que la doctrina jurídica ha realizado al método literal de interpretación. Aunque bueno es advertir que los criterios interpretativos tampoco pueden estar dirigidos a procurar transgredir el texto constitucional.

"El sentido de las palabras -dice Pablo Ramella- puede referirse al lenguaje que corresponde al tiempo en que fué dictada la Constitución. Eso no impide que con el correr de los años a una palabra pueda dársele un significado más amplio o más restringido que el de la época en que fué sancionada"<sup>(6)</sup>.

La Corte Suprema de la Nación "tiene decidido que no es acértada una interpretación estática de la Constitución", "pués el excesivo apego al tradicionalismo jurídico ha sido catalogado como uno de los más serios obstáculos al éxito de la promoción de la expansión económica y la justicia social"<sup>(7)</sup>.

Es claro que una interpretación dinámica de la

Constitución no puede conducir a su violación. "Interpretar una Constitución -comenta Ramella- no significa hacerle decir lo que de ninguna manera dice, ni alterar su texto, ni suprimirlo, como pretenden algunos autores, pues si así fuera la Constitución no tendría ningún sentido"<sup>(8)</sup>.

Si las constituciones no fueran elásticas, la Constitución dictada hace ciento treinta años para la Confederación Argentina no podría estar vigente en la Nación Argentina de 1984; ni siquiera la Constitución pampeana de 1960 podría estarse aplicando cuarto de siglo después. Este es uno de los temas permanentes en el estudio del Derecho Constitucional comparado <sup>(9)</sup>.

La interpretación dinámica o de lege lata posibilita que una constitución escrita "se vaya adecuando a las transformaciones que en calidad y cantidad experimentan las relaciones sociales, porque el núcleo de sentido, la idea de justicia consagrada, ante los estímulos que recibe de los nuevos contextos situacionales, también van extendiendo e intensificando su comprensión -dice Sampay-. Lo cual permite que la Constitución jurídica, en presencia de una nueva realidad social, en vez de trocarse en una mera Constitución nominal o Constitución semántica, devenga una Constitución viviente, a living Constitution como expresan los juristas norteamericanos" <sup>(10)</sup>.



### CONCEPTO DE COLONIZACION.

"Colonizar" es formar o establecer una colonia. Se trata de una expresión de origen latino (de colōnus, labrador ) que es utilizada casi universalmente: coloniser en francés, colonizzare en italiano, to colonise en inglés, Kolonisieren en alemán. Todas esas lenguas nos hablan de un conjunto de personas que van de un lugar a otro para poblarlo y eultivarlo, estableciéndose en él en forma de colonia.

De tal manera, no tendría sentido hablar de la "colonización" genéricamente, a lo largo de todo el territorio nacional o provincial. La "colonización" se hace por "colonias ", lugares perfectamente delimitados donde se radican los colonos.

La Constitución Nacional tiene esa comprensión del vocablo cuando incorpora la "colonización" a su temática. Con posterioridad a su sanción, pero antes del ingreso de Buenos Aires en 1860, España había dictado su ley del 21 de noviembre de 1855, motivada por la idea de establecer colonias agrícolas, nuevas poblaciones dedicadas a cultivar las tierras baldías y realengas o para mejorar sistemas productivos en las ya cultivadas. Surge de aquella ley una idea clara del concepto de colonización en nuestro idioma, estando reducido el desarrollo de las colonias a un área determinada (que no debía exceder las 322 hectáreas). Inspirado en similares objetivos el General Justo J. de Urquiza creó entre nosotros la "Colonia San José" en Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

La ley nacional de colonización 12.636 siguió una orientación similar en la materia, disponiendo para cada inmueble subdividido la formación de un consejo agrario local.

Los debates de la Convención Constituyente de la Pro-

vincia de La Pampa (1960) son también ilustrativos sobre este concepto de colonización y se encuadran en la orientación señalada. En efecto, estuvieron representadas en esa convención los dos partidos en que por entonces se dividió el radicalismo (UCR Intransigente, mayoritaria, y UCR del Pueblo, minoritaria), dado que se habían impuesto medidas proscriptivas contra el peronismo. Ambos partidos tenían en común programas y congresos agrarios previos a la división, donde habían seguido elaborando las ideas que (a iniciativa de los legisladores radicales Bernardino Horne, Leónidas Anastasi) dieran origen a la ley nacional de colonización 12.636. De allí que las diferencias no fueron sustanciales al discutirse las cláusulas constitucionales pampeanas, donde los representantes intransigentes aceptaron que "al establecer las bases a que debe ajustarse la colonización en el territorio de la provincia, entramos en el terreno reglamentario, impropio de un texto constitucional; pero consideramos que la importancia de la cuestión nos redime en parte, del pecado" <sup>(11)</sup>, según palabras del convencional Errecalte. El bloque radical del Pueblo propuso un agregado (que no fué aprobado) -inspirado en el artículo 45 de la Constitución de Entre Ríos de 1933 y el artículo 33 de la Constitución de Santiago del Estero de 1939- que hacía expresa mención a la "fundación de colonias" <sup>(12)</sup> (convencional Berhongaray), en consonancia con el concepto de colonización que aludo.

Las leyes vigentes en La Pampa en materia de colonización coincidieron en ese concepto hasta 1978. En efecto, la ley 277 caracterizó a las colonias, tendiendo a la formación de "centros sociales de vida económica propia" (art.18). Y la ley 490 promovió la erección de nuevos centros de colonización en el área del río Colorado.

## ANTECEDENTES LEGALES Y LEYES VIGENTES.

El análisis de la legislación referida al tema de colonización en la Provincia de La Pampa (leyes provinciales números 61, 101, 277, 310, 470, 497 y 858), revela que únicamente dos de esas leyes se encuentran en vigencia: la ley 277 que se aplica a la colonización en tierras de secano y la ley 858, para tierras de regadío.

La ley provincial 277 creó la Dirección de Tierras, dependiente del Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios, otorgándole diversas funciones, entre ellas intervenir en el "proyecto y ejecución de planes de colonización" (art.2).

Esta ley no observa una interpretación rigurosa de las normas constitucionales, por cuanto: a) autoriza a "otorgar permisos de ocupación precarios sobre fracciones de tierras de propiedad de la Provincia", incluso las que integran su "dominio público", "mientras no se destinen a su fin específico o no se incluyan en disposición de venta" (art.3); b) faculta al P.E. para "proceder a la venta de bienes inmuebles de dominio privado del Estado" (art.26), aún a personas jurídicas (art.29 y 30). Pero es evidente que ambas situaciones no obstan a la constitucionalidad de esta ley (que ya tiene muchos años de vigencia) por cuanto, aún cuando se trate de "tierras fiscales destinadas a la explotación agropecuaria", las disposiciones no comprenden el sistema de colonización, que la mencionada ley sólo legisla en el capítulo III (arts.14 a 25)

En este caso la ley 277 ha realizado una interpretación lato sensu del texto constitucional, cumplimentando sus cláusulas en lo que hace al mencionado régimen de colonización. El artículo 18 -como se ha dicho- conceptualiza a las colonias al decir: "Los inmuebles o conjunto de inmuebles de propiedad del Estado, constituidos en unidades económicas de explotación,

se estructurarán, según sus condiciones particulares, de modo tal que en su evolución se vayan transformando en CENTROS SOCIALES DE VIDA ECONOMICA PROPIA".

En cuanto a la ley 858, de colonización de tierras de regadío, fué dictada en 1978 por el gobierno militar. Mirada desde la óptica constitucional merece las siguientes objeciones:

- a) Concepto: sometió a la colonización todas "las tierras fiscales susceptibles de ser dominadas por cursos de agua y por ende de transformarse en tierras de regadío". Esta generalización, a mi juicio, excede el concepto constitucional de "colonización" al que hiciera referencia, llevandolo a extremos irrazonables, mucho más si se tiene en cuenta que en 1976 fué aprobado el tratado referente a la distribución de caudales del río Colorado.
- b) Tipos: Los regímenes de colonización tipo B y C son de una inconstitucionalidad manifiesta en la medida que son violatorios de los artículos 30 y 31 de la Constitución provincial.
- c) Confusión: Confunde la acción de colonizar con la venta de tierras fiscales, que en el derecho argentino está perfectamente diferenciada, como ya se señalara.
- d) Cooperativas: omite promover preferencialmente la colonización basada en "organizaciones cooperativas", como lo manda el art.30 inc.c de la Constitución provincial.
- e) Extranjeros: el art.85 autoriza la venta a "estados extranjeros para el afincamiento de sus naturales o súbditos", lo que está reñido con las facultades sobre colonización e inmigración ejercidas por las provincias con-

forme al art.107 de la Constitución Nacional. En efecto, el inmigrante es un extranjero que desea incorporarse al país con su radicación, siendo inadmisibles que lo haga como "súbdito" de una nación extranjera.

- f) Personas jurídicas: salvo el caso de cooperativas, la Constitución provincial prohíbe la adjudicación a sociedades mercantiles; en tanto esta ley posibilita que personas jurídicas sean adjudicatarias.
- g) Parcelas: también la ley permite adjudicar en parcelas que exceden la unidad económica, contraviniendo la Constitución provincial.
- h) Origen del dominio: los arts.1 y 64 hacen una distinción entre tierras "fiscales" y tierras "que no sean del dominio originario del Estado, sino que hayan sido obtenidas a título particular y con fines de colonización", que no tiene asidero legal ni doctrinario.

Con respecto a lo manifestado en el punto h), en un anterior estudio he puntualizado que el art.2339 del Código Civil distinguió el "dominio público" del "dominio privado" del Estado, contribuyendo a esclarecer tal concepto la clásica distinción entre el Estado como poder público y como persona jurídica de derecho privado, puesto que el Estado posee bienes públicos o privados conforme a sus dos grandes roles<sup>(14)</sup>.

"El elemento que caracteriza al dominio público es su afectación al uso y goce de la comunidad, del que no participan los bienes del dominio privado del Estado. Los bienes no afectados son siempre bienes privados."<sup>(15)</sup> Las tierras que los Estados

destinan a la venta o colonización son siempre tierras no afectadas. Poco importa el "origen" del dominio. La jurisprudencia así lo ha determinado.<sup>(16)</sup> Marienhoff dice sobre el particular: "A las tierras fiscales, que son bienes privados del Estado, suele llamárselas tierras públicas. Este, técnicamente no es correcto, pues no se trata de cosas del dominio público sino de cosas patrimoniales del Estado. Unicamente por comodidad de lenguaje se les llama públicas, con lo que en realidad sólo quiere expresarse que no se trata de tierras pertenecientes a los administrados, es decir a personas particulares, no obstante el carácter privado de tales bienes".<sup>(17)</sup>

### POSIBILIDAD DE REIMPLANTACION DE LA LEY 497.

La ley 497, dictada en 1973, rigió la afectación y colonización de las tierras comprendidas en la zona de influencia del río Colorado y tiene el innegable prestigio de haber sido sancionada por unanimidad por la H.Cámara de Diputados de La Pampa, lo que equivale a tener el aval de las mismas fuerzas políticas que hoy gravitan en la Provincia <sup>(18)</sup>.

Ante la evidencia de que la ley 858 (que la sustituyera) debe ser derogada: Es posible la reimplantación de la ley 497?

Evidentemente sí; cuanto menos su contenido es esencial en la formulación de bases para una legislación sobre colonización ajustada a la Constitución provincial.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las siguientes situaciones:

- 1) La ley 277 rige aún el tema de colonización en el área de secano, siendo de sana práctica legislativa comprender todo el tema de la colonización en una sólo ley.
- 2) Con posterioridad a su sanción el prestigioso especialista en derecho agrario, Dr. Rodolfo Carrera proyectó para La Pampa una ley de transformación fundiaria, con la incorporación de interesantes principios <sup>(19)</sup>.
- 3) La ley 497 fué dictada con anterioridad al Código de Aguas (ley 607, año 1974), por lo que el capítulo II de aquella deberá reverse.
- 4) Se ha seguido trabajando en nuevos criterios (v.g.: unidad económica), que debieran adicionarse.
- 5) Fué modificada la ley 497 durante su vigencia (ley 740).

ADJUDICACIONES REALIZADAS POR EL REGIMEN DE LA LEY 858.

Durante la vigencia de la ley 858 se realizaron adjudicaciones en la Sección Primera de Colonia 25 de Mayo que tienen los vicios de legitimidad propios de un régimen con vicios de inconstitucionalidad que han sido puntualizados.

Las adjudicaciones son las siguientes:

<u>ADJUDICATARIO</u>	<u>SUPERFICIE Has</u>
ABETOS ATANOR S.A.	900
LEGENDARIA S.A.	400
CAICALLEN S.A.	450
CALDERIA	110
SATIVA S.A.	120
MARTINEZ TENREIRO	230
CONCOR S.A.	115
PAISSANIDIS	240
AINAR AGROPECUARIA	310
COLONIA I S.A.	900
BAGLEY S.A.	470
ENVA S.A.	270
SANTO DOMINGO	<u>350</u>

total 4865 has.

En términos generales las adjudicaciones superan la unidad económica y, en muchos casos, han sido beneficiarias sociedades comerciales; todo ello con violación de la Constitución provincial.

Un examen pormenorizado en cada caso permitirá aconsejar las medidas pertinentes.



## APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES.

El artículo 34 de la Constitución provincial dispone: "El aprovechamiento de las aguas públicas superficiales y las corrientes subterráneas, será reglado por ley especial y el Poder Ejecutivo promoverá la celebración de convenios con otras provincias y la Nación, para el aprovechamiento de los cursos de aguas comunes, los que deben ser considerados en su unidad de cuenca".

El Código de Aguas (ley provincial 607) "establece las limitaciones al ejercicio de los derechos inherentes al dominio y utilización de las aguas". Pero no se ha dictado aún en La Pampa la ley que -conforme al enunciado constitucional- promueva la utilización de las aguas en consonancia con la política socio-económica del Estado provincial.

En relación a las aguas regidas por el tratado aprobado por la ley 750, dicha promoción debe realizarse dentro del programa allí convenido, que considera al río Colorado "en su unidad de cuenca" (art. 34 de la Constitución provincial).

Cada tipo de utilización del agua (riego, piscicultura, turismo y recreación, etcétera) merece contar con normas que aseguren su provechamiento, máxime en una provincia donde la escasez del recurso es superlativa y las posibilidades de desarrollo se encuentran tan vinculadas a esa utilización.

El riego es un rubro fundamental en una legislación semejante. Fuera de las áreas destinadas al establecimiento de colonias, debe encomendarse al P.E. y al Ente Provincial del Río Colorado promover el aprovechamiento del recurso mediante la adjudicación de cupos a quienes se encuentren en condiciones de favorecer el desarrollo de áreas bajo riego, autorizán-

doselos -a tal efecto- para proceder a la adjudicación de tierras en condiciones promocionales.

Entiendo que los criterios sociales que la Constitución provincial dedica al tema de la colonización no son de aplicación a la materia.

Cuando se dictó la Constitución (1960) las áreas de economía de riego no estaban desarrolladas en la provincia, de forma que las normas en materia de colonización estuvieron pensadas en función de las tierras fiscales en la zona de secano.

La promoción del aprovechamiento de las aguas superficiales se diferencia conceptual y fácticamente de la implantación de colonias. Sin embargo, es evidente que la legislación a proyectarse deberá atenerse a lo prescripto por el art. 28 de la Constitución provincial ("La actividad económica de la provincia será orientada teniendo como objetivo la armonización de los derechos del individuo y la comunidad") y la función social de la propiedad consagrada por el artículo 29. También deberán aplicarse principios del art. 31, del que se infiere la inconveniencia de los latifundios y los minifundios, así como la explotación de tierras por sociedades monopolistas y las formas tendientes a obtener renta de la tierra mediante la explotación de terceros.

ASESORAMIENTO AL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL.

En lo que va del trabajo he tenido conversaciones con diversos funcionarios de la Gobernación y del Ente Provincial del Rio Colorado ; asimismo con legisladores provinciales, a quienes he intervizado sobre el estudio encomendado.

Esos contactos deberán intensificarse en lo sucesivo a fin de que las ideas que se vuelquen en el trabajo tengan el máximo de consenso.

NOTAS:

- (1) "Estudio de los antecedentes legales e institucionales" del trabajo realizado por el Consejo Federal de Inversiones sobre aprovechamiento múltiple del río Colorado.
- (2) Alberdi, Juan B.: "Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina", Buenos Aires, ed.1954, p.124 y sgs.
- (3) Frías, Pedro : "Introducción al Derecho Público Provincial", Buenos Aires, 1980, p.157 u sgs.
- (4) García de Pacile, Alicia: "Los derechos individuales y sociales en las Constituciones Provinciales Argentinas", San Juan, 1984.
- (5) Sampay, Arturo E.: "La Constitución de Entre Ríos ante la Moderna Ciencia Constitucional", Paraná, 1936.
- (6) Ramella, Pablo: "Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1982, pg. 14.
- (7) Fallos: tº 256, p.588; La Ley: tº 116, p.227.
- (8) Ramella: op.cit. pg.14.
- (9) Véase: Rossi, Luigi: "La elasticità dello Statuto italiano", en Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1940, vol I y Chiarelli, Giuseppe: "Elasticità della Cons-

tituzione", en Studi de diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, 1952.

- (10) Sampay, Arturo E.: "Constitución y Pueblo", Buenos Aires, 1973, pg.84.
- (11) Diario de Sesiones: p. 414.
- (12) Diario de Sesiones: pg. 425.
- (13) "Estudio de los antecedentes legales e institucionales", cit.
- (14) Véase: Marienhoff, Miguel S.: "Tratado de dominio público", Buenos Aires, 1960; Diez, Manuel María: "Dominio Público", Buenos Aires, 1940; Villegas Basavilbaso, Benjamín: "Tratado de Derecho Administrativo" (tº IV), Buenos Aires, 1952; Gordillo, Agustín A.: "Derecho Administrativo de la Economía", Buenos Aires, 1967, y otros.
- (15) "Estudio de las antecedentes legales e institucionales", cit.
- (16) Jurisprudencia Argentina: tº12, p.447; tº 34, p.633.
- (17) Marienhoff, Miguel S.: op.cit. pg. 33.
- (18) Diario de Sesiones: año 1972, tº II, pg.615 y sgs.
- (19) Carrera, Rodolfo: "Anteproyecto de ley de transformación

fundiaria", C.F.I., 1974.-